



VIOLENCIA DE GÉNERO: ANÁLISIS DE LOS DERECHOS VICTIMOLÓGICOS EN ESPAÑA

Autora: Susana Moro Espí

Tutora: Andrea Planchadell Gargallo

**MÁSTER EN INTERVENCIÓN Y MEDIACIÓN
FAMILIAR**

SBD016- TRABAJO FINAL DE MÁSTER

CURSO: 2019-2020

ÍNDICE

1. Marco teórico.....	2
1.1. Justificación y motivación personal.....	2
1.2. Estructura	3
2. Análisis descriptivo de los derechos victimológicos.....	4
2.1. Justificación	4
2.2. Derechos de la víctima del delito en general	5
2.3. Derechos de la víctima vulnerable	12
2.4. Derechos de la víctima de violencia de género.....	14
3. Visión crítica y propuesta de mejora en relación a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género	16
4. Bibliografía.....	19

1. Marco teórico

1.1. Justificación y motivación personal

La propia realidad nos muestra que las formas de violentar a la mujer son muy variadas, desde el maltrato psicológico, aislamiento y abuso social, control y dominio, amenazas, chantaje emocional, abuso ambiental, violencia física, violencia o abuso sexual hasta el abuso económico. Únicamente reescribiendo las normas que hacen nuestra sociedad y asumiendo este cambio, podremos modificar las estadísticas tan denostadas por todos y todas en relación a las agresiones y muertes de la mujer a manos de sus parejas o exparejas (García, 2015). Por tanto, el propósito del siglo XXI debe de ser conseguir la igualdad entre el hombre y la mujer y romper con las barreras existentes actualmente en todos los ámbitos de la vida.

La violencia de género ha sido durante muchos años un problema negado, a la vez que ubicado dentro del ámbito privado y familiar, que ha provocado que no sea un problema político, social ni jurídico y, por tanto, no se haya intervenido en él hasta tiempos recientes. La consecuencia de ello ha sido la problemática de intervención por parte de los organismos públicos para su erradicación, bien porque la víctima no denunciaba la agresión o bien si lo hacía la policía y jueces le quitaban importancia al no estar sensibilizados con el tema (García, 2015).

Las cifras de la encuesta realizada por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, sobre violencia de género contra las mujeres del 5 de marzo de 2014 en Bruselas muestran unos resultados aterradores en Europa. Esta encuesta basada en entrevistas realizadas a mujeres de entre 18 a 74 años en todos los estados miembros (Rights, 2014), nos muestra los siguientes porcentajes de distintos tipos de violencia sufrida por las mujeres:

Violencia física y/o sexual	33%
Violencia física y/o sexual por su pareja	22%
Violencia sexual alguna vez desde los 15 años	5%
Violencia psicológica	43%
Acoso sexual	55%
Denuncian las agresiones	33%

Estos datos ponen de manifiesto lo alarmante de la situación. Es innegable que nos enfrentamos a una problemática que, a pesar de los avances que en los últimos años se hayan podido realizar, sigue estando muy presente y no podemos obviar ni esconder. Parece que, la única manera de afrontarlo sea que todos seamos partícipes, fomentando la conciencia y sensibilización hacia este tipo de violencia, para poder reducirla, y como meta final, conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, teniendo unas relaciones más satisfactorias.

Mi motivación principal para realizar este trabajo final de máster viene relacionado con mi estancia en Cruz Roja en dos de los programas pioneros a nivel provincial como son JUNTES desde 2016 y ATENPRO, que se encuentra también a nivel nacional desde el año 2004, centrándose ambos en la lucha contra la violencia de género.

El programa JUNTES consiste en realizar acompañamientos de cualquier tipo (laboral, social, psicológico, de ocio...) a aquellas mujeres que han sido maltratadas y necesitan apoyo, tanto previo al juicio como tras su resolución. Se encarga de proporcionar herramientas para que las mujeres salgan de todo este proceso empoderadas.

A mi parecer, un punto muy positivo con el que cuenta este proyecto es que las mujeres que están en dicho proceso pueden compartir sus experiencias con otras que han pasado por la misma situación, y, además, tienen voluntarias que muchas veces son mujeres que ya han salido de todo ello, lo que les permite pensar si otras han sido capaces, ellas también pueden.

El Servicio ATENPRO ofrece a las mujeres víctimas de violencia de género, una atención móvil inmediata y a distancia, asegurando una respuesta rápida a las eventualidades que les puedan sobrevenir, las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en que se encuentren, pudiendo disponer de dicho servicio hasta que se encuentren tranquilas y sin miedo cuando ellas mismas decidan darse de baja.

1.2. Estructura

El trabajo se encuentra dividido en cinco partes. En la primera de ellas, se lleva a cabo una breve justificación del tema, en que se citan principalmente los dos textos legales de referencia en la materia.

En la segunda parte, se define el concepto de víctima de manera general; para exponer, a continuación, los derechos que como tal le corresponde.

En la tercera parte, se analiza lo que se entiende por vulnerabilidad y víctimas con necesidades especiales, profundizando en sus derechos.

Las últimas dos partes recogen de una manera más exhaustiva los derechos de las víctimas de violencia de género, aportando desde mi experiencia como psicóloga en el Programa JUNTES y ATENPRO de Cruz Roja una visión crítica de aquellos con los que he podido trabajar más, finalizando con una propuesta de mejora.

2. Análisis descriptivo de los derechos victimológicos

2.1. Justificación

El presente trabajo final de máster parte de la inevitable consideración de dos importantes textos legales. Por un lado, la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito y por otro, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

En primer lugar, nos centraremos en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito. En su Preámbulo, se recogen los motivos por los cuales se elaboró y aprobó dicho estatuto, cuya finalidad principal, tomando como referencia la normativa europea, es la de ofrecer -desde los poderes públicos- una respuesta lo más amplia posible tanto en lo jurídico como en lo social, para las víctimas, partiendo siempre del reconocimiento de su dignidad, la defensa de sus bienes materiales y morales.

En cuanto al contenido y estructura de la Ley, se inicia con un Título Preliminar dedicado a las disposiciones generales, donde queda recogido el concepto de víctima para toda aquella persona que sufra un perjuicio físico, moral o económico como consecuencia de un delito.

A continuación, en los siguientes Títulos se exponen todos los derechos que estas tienen, señalándose como principales el derecho a la información, protección, apoyo, a la participación en el proceso, el reconocimiento como tal y por último, el derecho a un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio. Destacar, que estos derechos se aplicarán a todas las víctimas de delitos ocurridos en España o que puedan ser perseguidos aquí.

Sin perjuicio de los problemas de aplicación de dicha norma, en los que no podemos entrar, es innegable que la aprobación del Estatuto brinda a todas las víctimas de un delito la puesta en marcha de sus derechos, sin necesidad de ser parte del proceso penal; participación ésta última en que se centra la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Planchadell, 2018).

En segundo lugar, profundizaremos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En la Exposición de Motivos de dicha norma, queda expuesto que la finalidad de aprobar dicha Ley es poder atender a las recomendaciones de los organismos internacionales en el sentido de proporcionar una respuesta global a la violencia que se ejerce sobre las mujeres, teniendo en cuenta la desigualdad latente en nuestra sociedad proveniente de muchos años de historia dónde el papel de la mujer ha sido siempre inferior al del hombre.

Por esta razón, dicha Ley abarca tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas, como la normativa civil que incide en el ámbito familiar o de convivencia donde se producen las agresiones, así como el principio de subsidiariedad en las Administraciones Públicas.

La Ley se estructura en un Título Preliminar, cinco Títulos, veinte Disposiciones Adicionales, dos Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y siete Disposiciones Finales donde quedan recogidas las medidas de sensibilización, prevención, detección e intervención de los diversos ámbitos, los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, las medidas de protección en el ámbito civil, de apoyo a las funcionarias públicas, de apoyo económico, la Tutela institucional y judicial, normas de naturaleza penal y la creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

Ahora bien, es imposible adentrarse en el estudio del Estatuto de la Víctima sin realizar una mención, siquiera somera, a la influencia al respecto de las instituciones europeas. Partiendo de dicha realidad, los antecedentes europeos más importantes se sitúan en la Decisión Marco 2001/220/JAI del Consejo, de 15 de marzo de 2001, relativa al Estatuto de la Víctima en el proceso penal, donde se realizó un primer paso para establecer estándares comunes de protección de las víctimas para los diversos Estados. La Decisión desarrolló de modo desigual los derechos de las víctimas a la información, el acceso a la justicia y la participación, protección, reparación y asistencia (Tamarit, 2015).

A partir del 2011, se establece un mayor compromiso hacia los derechos de las víctimas, teniendo en consideración sus derechos humanos y la protección que les corresponde, la cual queda manifestada en la Directiva 2011/36/UE, sobre trata de seres humanos y posteriormente, en la Directiva 2011/92/ UE de 13 de diciembre en relación a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil.

Este va a ser el marco de referencia hasta que mediante la Directiva 2012/29, del Parlamento y del Consejo, de 25 de octubre, la Unión Europea establece unos derechos mínimos para las víctimas que deben ser cumplidos por todos los Estados Miembros y con la novedad de reconocer el derecho a ser informado cuando el condenado es puesto en libertad, sustituyendo así la Decisión Marco 2001/220/JAI del Consejo, de 15 de marzo.

La Directiva se centra en el principio de individualización atendiendo a las necesidades específicas de cada víctima y siempre teniendo presente el interés de la misma. Por parte de esta, adquiere una atención especial lo referido a la protección de tanto las víctimas en general como las especialmente vulnerables, transformando este último término a la idea a personas con necesidades especiales. Se prevén así tres niveles de protección: víctimas de características generales, víctimas de necesidades especiales y menores (Tamarit, 2015).

2.2. Derechos de la víctima del delito en general

La situación que encontramos en España en relación a la víctima se sitúa en un papel privilegiado y muy diferente de otros países de nuestro entorno y es que con la aprobación del EV se ha pretendido conseguir una recuperación de la moral de la víctima y evitar una victimización secundaria (Planchadell, 2018).

No podemos hablar de derechos a favor de, sin primero saber que se entiende por “víctima”. Dicho concepto queda recogido en el Título Preliminar dentro de Disposiciones Generales en el art. 2 dónde se establece por primera vez en un texto legal nacional, un concepto de víctima de delito. Se trata de un concepto aplicable a la víctima de “todo tipo de delito”, para seguidamente, distinguir entre víctimas directas e indirectas, con especial mención a las víctimas con necesidades especiales (Planchadell, 2018).

Entendiendo por una parte como víctima directa *“toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio sobre su propia persona o patrimonio, en especial lesiones físicas o psíquicas, daños emocionales o perjuicios económicos directamente causados por la comisión de un delito”* (art.2 Est.Vict.) y por otra parte, como víctima indirecta *“en los casos de muerte o desaparición de una persona que haya sido causada directamente por un delito, salvo que se tratare de los responsables de los hechos:*

1º A su cónyuge no separado legalmente o de hecho y a los hijos de la víctima o del cónyuge no separado legalmente o de hecho que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran con ellos; a la persona que hasta el momento de la muerte o desaparición hubiera estado unida a ella por una análoga relación de afectividad y a los hijos de ésta que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran con ella; a sus progenitores y parientes en línea recta o colateral dentro del tercer grado que se encontraren bajo su guarda y a las personas sujetas a su tutela o curatela o que se encontraren bajo su acogimiento familiar.

2º En caso de no existir los anteriores, a los demás parientes en línea recta y a sus hermanos, con preferencia, entre ellos, del que ostentara la representación legal de la víctima.

La consideración de víctima no se hace depender de la existencia de un acusado, identificado o presuntamente identífico; se es víctima por haber sufrido un hecho delictivo o verse afectado por él en los términos del artículo 2 transcrito.

Una vez proporcionado el concepto general de víctima, el Estatuto pasa a exponer en el artículo 3, y de manera genérica, los derechos que a estas les corresponden:

“1. Toda víctima tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia y atención, así como a la participación activa en el proceso penal y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde su primer contacto con las autoridades o funcionarios, durante la actuación de los servicios de asistencia y apoyo a las víctimas y de justicia restaurativa, a lo largo de todo el proceso penal y por un período de tiempo adecuado después de su conclusión, con independencia de que se conozca o no la identidad del infractor y del resultado del proceso.

2. El ejercicio de estos derechos se regirá por lo dispuesto en la presente Ley y en las disposiciones reglamentarias que la desarrollen, así como por lo dispuesto en la legislación especial y en las normas procesales que resulten de aplicación”

Seguidamente, en el Título I se engloban los “*Derechos Básicos*” entre los que se tiene como pilares: el reconocimiento, el apoyo y la protección de la víctima:

1º Derecho a entender y ser entendida (art. 4) en cualquier actuación que deba llevarse a cabo desde la interposición de una denuncia y durante el proceso penal, incluida la información previa a la interposición de la misma. Al respecto, destaca la importancia de realizar dicha comunicación en un lenguaje claro, sencillo y accesible, siempre atendiendo a las características personales de la víctima y a sus necesidades.

Además, se facilitará a la víctima, desde su primer contacto con las autoridades o con las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, la asistencia o apoyos necesarios para que pueda hacerse entender ante ellas, lo que incluirá la interpretación en las lenguas de signos reconocidas legalmente y los medios de apoyo a la comunicación oral de personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas pudiendo siempre estar acompañada de una persona de su elección. Se fundamenta en la necesidad de apoyo que tienen las víctimas dados sus sentimientos de soledad, incomunicación, desconfianza y desamparo (Tamarit, 2015).

2º Derecho a la información desde el primer contacto con las autoridades competentes (art. 5) incluyendo el momento previo a la presentación de la denuncia, a recibir, sin retrasos innecesarios, información adaptada a sus circunstancias y condiciones personales y a la naturaleza del delito cometido, de los daños y perjuicios sufridos, sobre los siguientes extremos.

- a) Medidas de asistencia y apoyo disponibles, sean médicas, psicológicas o materiales, y procedimiento para obtenerlas. Incluyéndose, cuando resulte oportuno, información sobre las posibilidades de obtener un alojamiento alternativo.
- b) Derecho a denunciar y, en su caso, el procedimiento para interponer la denuncia y a facilitar elementos de prueba a las autoridades encargadas de la investigación.
- c) Procedimiento para obtener asesoramiento y defensa jurídica y, en su caso, condiciones en las que pueda obtenerse gratuitamente.
- d) Posibilidad de solicitar medidas de protección y, en su caso, procedimiento para hacerlo.
- e) Indemnizaciones a las que pueda tener derecho y, en su caso, procedimiento para reclamarlas.
- f) Servicios de interpretación y traducción disponibles.
- g) Ayudas y servicios auxiliares para la comunicación disponibles.
- h) Procedimiento por medio del cual la víctima pueda ejercer sus derechos en el caso de que resida fuera de España.
- i) Recursos que puede interponer contra las resoluciones que considere contrarias a sus derechos.
- j) Datos de contacto de la autoridad encargada de la tramitación del procedimiento y cauces para comunicarse con ella.

k) Servicios de justicia restaurativa disponibles, en los casos en que sea legalmente posible.

l) Supuestos en los que pueda obtener el reembolso de los gastos judiciales y, en su caso, procedimiento para reclamarlo.

m) Derecho a efectuar una solicitud para ser notificada de las resoluciones a las que se refiere el artículo 7. A estos efectos, la víctima designará en su solicitud una dirección de correo electrónico y, en su defecto, una dirección postal o domicilio, al que serán remitidas las comunicaciones y notificaciones por la autoridad.

Esta información será actualizada en cada fase del procedimiento, para garantizar a la víctima la posibilidad de ejercer sus derechos.

3º Derechos de la víctima como denunciante (art. 6). Toda víctima tiene, en el momento de presentar su denuncia, derecho a obtener una copia de la denuncia, debidamente certificada, una asistencia lingüística gratuita y a la traducción escrita de la copia de la denuncia presentada, cuando no entienda o no hable ninguna de las lenguas que tengan carácter oficial en el lugar en el que se presenta la denuncia.

4º Derecho a recibir información sobre la causa penal (art. 7) concretamente la fecha, hora y lugar del juicio y el contenido de la acusación planteada, notificándosele, además, las siguientes decisiones:

a) La resolución por la que se acuerde no iniciar el procedimiento penal.

b) La sentencia que ponga fin al procedimiento.

c) Las resoluciones que acuerden la prisión o la posterior puesta en libertad del infractor, así como la posible fuga del mismo.

d) Las resoluciones que acuerden la adopción de medidas cautelares personales o que modifiquen las ya acordadas, cuando hubieran tenido por objeto garantizar la seguridad de la víctima.

e) Las resoluciones o decisiones de cualquier autoridad judicial o penitenciaria que afecten a sujetos condenados por delitos cometidos con violencia o intimidación y que supongan un riesgo para la seguridad de la víctima.

f) Las resoluciones a que se refiere el artículo 13.

Estas comunicaciones incluirán, al menos, la parte dispositiva de la resolución y un breve resumen del fundamento de la misma, y serán remitidas a su dirección de correo electrónico. Excepcionalmente, si la víctima no dispusiera de una dirección de correo electrónico, se remitirán por correo ordinario a la dirección que hubiera facilitado. En el caso de ciudadanos residentes fuera de la Unión Europea, si no se dispusiera de una dirección de correo electrónico o postal en la que realizar la comunicación, se remitirá a la oficina diplomática o consular española en el país de residencia para que la publique.

Las víctimas podrán manifestar en cualquier momento su deseo de no ser informadas de las resoluciones, como por otra parte, cuando lo solicite, información relativa a la situación en que se encuentra el procedimiento, salvo que ello pudiera perjudicar el correcto desarrollo de la causa.

5º Derecho a un período de reflexión en garantía de los derechos de la víctima (art. 8). Donde los Abogados y Procuradores no podrán dirigirse a las víctimas directas o indirectas de catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que hubieran producido un número elevado de víctimas que cumplan los requisitos que se determinen profesionales hasta transcurridos 45 días desde el hecho, quedando sin efecto en el caso de que la prestación de estos servicios profesionales haya sido solicitada expresamente por la víctima.

6º Derecho a la traducción e interpretación (art. 9). Toda víctima que no hable o no entienda el castellano o la lengua oficial que se utilice en la actuación de que se trate tendrá derecho a ser asistida gratuitamente por un intérprete que hable una lengua que comprenda cuando se le reciba declaración en la fase de investigación por el Juez, el Fiscal o funcionarios de policía, o cuando intervenga como testigo en el juicio o en cualquier otra vista oral.

Dicha asistencia del intérprete se podrá prestar por medio de videoconferencia o cualquier medio de telecomunicación, salvo que el Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, acuerde la presencia física del intérprete para salvaguardar los derechos de la víctima.

7º Derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo (art. 10) facilitados por las Administraciones Públicas y las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de forma gratuita y confidencial pudiendo extenderse a los familiares de la víctima, cuando se trate de delitos que hayan causado perjuicios de especial gravedad.

En el *Título II “Participación de la víctima en el proceso penal”* quedan recogidos los siguientes derechos:

8º Derecho a la participación activa en el proceso penal (art. 11) pudiendo ejercer la acción penal y la acción civil conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el derecho a comparecer ante las autoridades encargadas de la investigación para aportarles las fuentes de prueba y la información que estime relevante para el esclarecimiento de los hechos.

9º Derecho a la comunicación y revisión del sobreseimiento de la investigación a instancia de la víctima (art. 12). Fundamental para que se sienta escuchada dentro del proceso.

- a) La resolución de sobreseimiento será comunicada, de conformidad con lo previsto en el art. 636 Lecrim respecto a cómo practicarlo. Así, se comunicará a las víctimas directas del delito que hubieran denunciado los hechos, así como al resto de víctimas directas de cuya identidad y domicilio se tuviera conocimiento.
- b) La víctima podrá recurrir la resolución de sobreseimiento sin personarse en el proceso, mediante los recursos de apelación y casación (art.848, II Lecrim).

10° Derecho a la participación de la víctima en la ejecución (art. 13). A la víctima se le va a permitir recurrir siempre que hubiera solicitado que se le comuniquen, una serie de decisiones adoptadas por el Juez de Vigilancia Penitenciaria en fase de ejecución de sentencia, no pocas de ellas de gran trascendencia para su protección (Planchadell, 2015). Concretamente, las decisiones que, en su caso, se le comunicaran son:

- El auto por el que el Juez de Vigilancia Penitenciaria autoriza la posible clasificación del penado en tercer grado antes de que se extinga la mitad de la condena cuando la víctima lo fuera de alguno de los siguientes delitos: de homicidio, de aborto, de lesiones, contra la libertad, de tortura y contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexual, de robo cometidos con violencia o intimidación, de terrorismo, de trata de seres humanos.

- El auto por el que el Juez de Vigilancia Penitenciaria acuerde que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se refieran al límite de cumplimiento de condena, y no a la suma de las penas impuestas, cuando la víctima lo fuera de alguno de los delitos del apartado anterior.

- El auto por el que se conceda al penado la libertad condicional, cuando se trate de alguno de los delitos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 36.2 del Código Penal o de alguno de los delitos del apartado a.

Además, la víctima puede interesar que se impongan al liberado condicional las medidas o reglas de conducta previstas por la Ley que consideren necesarias para garantizar su seguridad, cuando aquél hubiera sido condenado por hechos de los que pueda derivarse razonablemente una situación de peligro para la víctima.

11° Derecho al reembolso de los gastos (art. 14) necesarios para el ejercicio de sus derechos y las costas procesales que se le hubieren causado con preferencia respecto del pago de los gastos que se hubieran causado al Estado, cuando se imponga en la sentencia de condena su pago y se hubiera condenado al acusado, a instancia de la víctima, por delitos por los que el Ministerio Fiscal no hubiera formulado acusación o tras haberse revocado la resolución de archivo por recurso interpuesto por la víctima.

12° Derecho a los Servicios de Justicia Restaurativa (art. 15) en los términos que reglamentariamente se determinen, con la finalidad de obtener una adecuada reparación material y moral de los perjuicios derivados del delito, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

- a) el infractor haya reconocido los hechos esenciales de los que deriva su responsabilidad;
- b) la víctima haya prestado su consentimiento, después de haber recibido información exhaustiva e imparcial sobre su contenido, sus posibles resultados y los procedimientos existentes para hacer efectivo su cumplimiento;
- c) el infractor haya prestado su consentimiento;
- d) el procedimiento de mediación no entrañe un riesgo para la seguridad de la víctima, ni exista el peligro de que su desarrollo pueda causar nuevos perjuicios materiales o morales para la víctima; y no esté prohibida por la ley para el delito cometido.

Los debates desarrollados dentro del procedimiento de mediación serán confidenciales y no podrán ser difundidos sin el consentimiento de ambas partes y tanto la víctima como el infractor podrán revocar su consentimiento para participar en el procedimiento de mediación en cualquier momento.

13° Derecho a la justicia gratuita (art. 16): Las víctimas podrán presentar sus solicitudes de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita ante el funcionario o autoridad que les facilite la información a la que se refiere la letra c) del artículo 5.1, que la trasladará, junto con la documentación aportada, al Colegio de Abogados correspondiente. Aplicándose las previsiones de la Lecrim y de la Ley 17/1996, de 10 de enero, relativas a la asistencia jurídica gratuita.

14° Derecho de las víctimas de delitos cometidos en otros Estados miembros de la Unión Europea (art. 17) a presentar ante las autoridades españolas denuncias correspondientes a hechos delictivos que hubieran sido cometidos en el territorio de otros países de la Unión Europea.

15° Derecho a la devolución de bienes (art. 18) de su propiedad que hubieran sido incautados en el proceso penal, sin demora. Teniendo en consideración el nuevo art.334 de la Lecrim que opta por la restitución inmediata de los bienes incautados.

La devolución podrá ser denegada cuando la conservación de los efectos por la autoridad resulte imprescindible para el correcto desarrollo del proceso penal y no sea suficiente con la imposición al propietario de una obligación de conservación de los efectos a disposición del Juez o Tribunal.

A continuación, en el *Título III “Protección de las víctimas”* quedan recogidos los siguientes derechos que remiten a su vez a lo previsto en la Lecrim:

16° Derecho de las víctimas a la protección (art. 19). Las autoridades y funcionarios encargados de la investigación, persecución y enjuiciamiento de los delitos adoptarán las medidas necesarias para garantizar la vida de la víctima y de sus familiares, su integridad física y psíquica, libertad, seguridad, libertad e indemnidad sexuales, así como para proteger adecuadamente su intimidad y su dignidad, particularmente cuando se les reciba declaración o deban testificar en juicio, y para evitar el riesgo de su victimización secundaria o reiterada.

17° Derecho a que se evite el contacto entre víctima e infractor (art. 20). Las dependencias en las que se desarrollen los actos del procedimiento penal, incluida la fase de investigación, estarán dispuestas de modo que se evite el contacto directo entre las víctimas y sus familiares, de una parte, y el sospechoso de la infracción o acusado.

18° Derecho a la protección de la víctima durante la investigación penal (art. 21). Las autoridades y funcionarios encargados de la investigación penal velarán por que, en la medida que ello no perjudique la eficacia del proceso:

- a) Se reciba declaración a las víctimas, cuando resulte necesario, sin dilaciones injustificadas.
- b) Se reciba declaración a las víctimas el menor número de veces posible, y únicamente cuando resulte estrictamente necesario para los fines de la investigación penal.

c) Las víctimas puedan estar acompañadas, además de por su representante procesal y en su caso el representante legal, por una persona de su elección.

d) Los reconocimientos médicos de las víctimas solamente se lleven a cabo cuando resulten imprescindibles para los fines del proceso penal, y se reduzca al mínimo el número de los mismos.

19º Derecho a la protección de la intimidad (art. 22). Los Jueces, Tribunales, Fiscales y las demás autoridades y funcionarios encargados de la investigación penal, así como todos aquellos que de cualquier modo intervengan o participen en el proceso, adoptarán, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, las medidas necesarias para proteger la intimidad de todas las víctimas y de sus familiares y, en particular, para impedir la difusión de cualquier información que pueda facilitar la identificación de las víctimas menores de edad o de víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección. Teniendo en cuenta el art.681 Lecrim.

2.3. Derechos de la víctima vulnerable

La vulnerabilidad es una imagen que suele estar presente en la percepción social de la victimidad, refiriéndose a las víctimas especialmente vulnerables como aquellas que deben estar más protegidas. (Tamarit, 2015).

Dicho concepto de víctima vulnerable ha evolucionado para adoptar la terminología de víctimas con necesidades especiales, las cuales exigen un mayor esfuerzo de protección, pues se trata de víctimas que están especialmente expuestas al riesgo de victimización secundaria, de intimidación o represalias por el infractor, esto tiene relación con las características personales que poseen o que se ven afectadas por ciertas situaciones que pueden llevarlas a una especial victimización o fragilidad y para cuya protección se prevé una evaluación individualizada (menores de edad, mayores incapaces, ancianos, mujeres) (Planchadell, 2015).

Dentro del *Título III “Protección de las víctimas”* quedan recogidos los siguientes derechos:

1º Derecho a la evaluación individual de las víctimas a fin de determinar sus necesidades especiales de protección (art. 23). La determinación de qué medidas de protección, deben ser adoptadas para evitar a la víctima perjuicios relevantes que, de otro modo, pudieran derivar del proceso, se realizará tras una valoración de sus circunstancias particulares. Teniendo presente las características personales de la víctima, la naturaleza del delito y la gravedad de los perjuicios causados a la víctima, así como el riesgo de reiteración del delito y por último, las circunstancias del delito, si fueron violentos o no.

2º Derecho a medidas de protección (art. 25).

Durante la fase de investigación podrán ser adoptadas las siguientes medidas para la protección de las víctimas:

- a) Que se les reciba declaración en dependencias especialmente concebidas o adaptadas a tal fin.
- b) Que se les reciba declaración por profesionales que hayan recibido una formación especial para reducir o limitar perjuicios a la víctima, o con su ayuda.
- c) Que todas las tomas de declaración a una misma víctima le sean realizadas por la misma persona, salvo que ello pueda perjudicar de forma relevante el desarrollo del proceso o deba tomarse la declaración directamente por un Juez o un Fiscal.
- d) Que la toma de declaración, cuando se trate de alguna de las víctimas a las que se refieren los números 3.º y 4.º de la letra b) del apartado 2 del artículo 23 y las víctimas de trata con fines de explotación sexual, se lleve a cabo por una persona del mismo sexo que la víctima cuando ésta así lo solicite, salvo que ello pueda perjudicar de forma relevante el desarrollo del proceso o deba tomarse la declaración directamente por un Juez o Fiscal.

2. Durante la fase de enjuiciamiento podrán ser adoptadas, conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las siguientes medidas para la protección de las víctimas:

- a) Evitar el contacto visual entre la víctima y el supuesto autor de los hechos, incluso durante la práctica de la prueba. El empleo de videoconferencia para la práctica de testificales y de otro tipo de diligencias está contemplada en los arts.325 y 731 bis Lecrim, que se han mantenido inmodificados por la LEVID.
- b) Garantizar que la víctima pueda ser oída sin estar presente en la sala de vistas, mediante la utilización de tecnologías de la comunicación adecuadas. Esta medida es la nueva redacción otorgada a la práctica de la prueba testifical en el acto de juicio oral por el art.707 Lecrim.
- c) Evitar que se formulen preguntas relativas a la vida privada de la víctima que no tengan relevancia con el hecho delictivo enjuiciado, salvo que el Juez o Tribunal consideren excepcionalmente que deben ser contestadas. En la Disposición Final Primera de la LEVID, se prevé una nueva redacción del art. 709 Lecrim para establecer una limitación de las preguntas referidas.
- d) Celebración de la vista oral sin presencia de público, siendo la celebración de las sesiones, contemplada en el art. 681.1 Lecrim.

Las medidas a las que se refieren las letras a) y c) también podrán ser adoptadas durante la fase de investigación.

2.4. Derechos de la víctima de violencia de género

En la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género se hace referencia a como la violencia de género es un tipo de violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.

En el Título II encontramos los “*Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género*” más concretamente dentro del Capítulo I: “*Derecho a la información, a la asistencia social integral y a la asistencia jurídica gratuita*”:

1º Garantía de los derechos de las víctimas (art. 17) a todas las mujeres que han sufrido violencia de género, independientemente de su sexo, religión origen... Con la finalidad de hacer reales y efectivos sus derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la libertad y seguridad y a la igualdad, no discriminación por razón de sexo.

2º Derecho a la información (art. 18) plena y asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer las Administraciones. Dicha información comprenderá las medidas contempladas en esta Ley relativas a su protección y seguridad, y los derechos y ayudas previstos en la misma, así como la referente al lugar de prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral.

3º Derecho a la asistencia social integral (art. 19), es decir, a los servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral.

La atención multidisciplinar implicará especialmente: Información a las víctimas, atención psicológica, apoyo social, seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer, apoyo educativo a la unidad familiar, formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos y apoyo a la formación e inserción laboral.

4º Asistencia jurídica (art. 20). Las mujeres víctimas de violencia de género que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, en los términos establecidos en la Ley 1/1996, de 10 enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, tienen derecho a la defensa y representación gratuitas por Abogado y Procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida. En estos supuestos una misma dirección letrada asumirá la defensa de la víctima.

En todo caso, se garantizará la defensa jurídica, gratuita y especializada de forma inmediata a todas las víctimas de violencia de género que lo soliciten, sin perjuicio de que si no se les reconoce con posterioridad el derecho a la asistencia jurídica gratuita, éstas deberán abonar al abogado los honorarios devengados por su intervención.

En el Capítulo II encontramos los “*Derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social*” los cuales son:

5º Derechos laborales y de Seguridad Social (art. 21) La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo. El tiempo de suspensión se considerará como período de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social y de desempleo.

A las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género que cesen en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, se les suspenderá la obligación de cotización durante un período de seis meses, que les serán considerados como de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social. Asimismo, su situación será considerada como asimilada al alta.

En el Capítulo III se exponen los “*Derechos de las funcionarias públicas*” que son:

6º Ámbito de los derechos (art. 24): La funcionaria víctima de violencia de género tendrá derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica de centro de trabajo y a la excedencia en los términos que se determinen en su legislación específica.

7º Justificación de las faltas de asistencia (art. 25): Las ausencias totales o parciales al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género sufrida por una mujer funcionaria se considerarán justificadas en los términos que se determine en su legislación específica.

En el Capítulo IV que recoge los “*Derechos económicos*” quedan englobados:

8º Ayudas sociales (art. 27). Cuando las víctimas de violencia de género careciesen de rentas superiores, en cómputo mensual, al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, recibirán una ayuda de pago único, siempre que se presuma que debido a su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales, la víctima tendrá especiales dificultades para obtener un empleo y por dicha circunstancia no participará en los programas de empleo establecidos para su inserción profesional.

El importe de esta ayuda será equivalente al de seis meses de subsidio por desempleo. Cuando la víctima de la violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida oficialmente una minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100, el importe sería equivalente a 12 meses de subsidio por desempleo.

En el caso de que la víctima tenga responsabilidades familiares, su importe podrá alcanzar el de un período equivalente al de 18 meses de subsidio, o de 24 meses si la víctima o alguno de los familiares que conviven con ella tiene reconocida oficialmente una minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100.

9º Acceso a la vivienda y residencias públicas (art. 28) para mayores dónde estas serán consideradas como colectivos prioritarios de acceso.

3. Visión crítica y propuesta de mejora en relación a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

Es innegable que la entrada en vigor de la LIVG ha sido una fuerte propuesta por parte del legislador, dando un gran paso hacia delante en la lucha contra la violencia machista, al ser considerado España como pionero en el reconocimiento de los derechos de las mujeres que han sufrido o están sufriendo dicho tipo de violencia. A pesar de que, en la actualidad, sigue siendo una realidad muy presente, lo que nos indica que debemos de seguir por este camino, luchando, para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres.

Ahora bien, debemos primero que nada, tener en cuenta que dicha Ley se aprobó hace casi 16 años, por lo que invita a una revisión crítica sobre su efectividad y la necesidad de renovarla teniendo presente la realidad actual y más, tras la aprobación en 2015 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito dónde quedan incluidos los derechos de la víctima, y haciendo hincapié en las que son especialmente vulnerables como son las mujeres maltratadas.

Más adelante, procederé a citar aquellos aspectos que considero deberían ser sujeto de análisis para su posterior mejora, desde mi experiencia personal y como psicóloga en el programa de ATENPRO y JUNTES dónde he tenido la oportunidad de trabajar con estas mujeres de primera mano.

Me gustaría comenzar con el artículo 1 del Título Preliminar donde encontramos el objeto de la Ley que es *“Actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”*

A mi parecer, el legislador cuando redactó este artículo dejó un marco de referencia muy amplio que posteriormente ha ocasionado mucho debate en los Tribunales. Este se centra en las relaciones matrimoniales y de noviazgo básicamente, sin contemplar que en la actualidad las relaciones han evolucionado y no podemos dejar al margen ni las parejas de formato no convencional ni las amistades. La mayor controversia la encontramos en la ambigüedad de *“hayan estado ligadas a ella por relaciones similares de afectividad”*. Dicho lo anterior, bajo mi óptica se debería tenerse en consideración cualquier tipo de relación sin necesidad de una aparente afectividad, ya que, lo que se pretende es erradicar esa relación de poder que tiene el hombre hacia la mujer.

En el artículo 2 apartado k *“Garantizar el principio de transversalidad de las medidas, de manera que en su aplicación se tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas de todas las mujeres víctimas de violencia de género”* hace referencia a un punto que es fundamental que se ejecute y que el legislador dejó bien plasmado, pero que en la realidad he podido observar que no es así.

Cuando he realizado las intervenciones con las mujeres víctimas de violencia de género he podido ser testigo de cómo ellas perciben que sus necesidades y demandas específicas no se tienen en cuenta. La mujer no se siente escuchada, el procedimiento es automático, hay unas pautas marcadas que a mi forma de ver no se deberían de generalizar, porque cada una es un mundo y previo a tomar las medidas se debería realmente tenerla en cuenta. De ahí, la necesidad de tener presente la opinión de la víctima y no persistir en el mito de que es incapaz de decidir por sí misma, permitiendo que pase de estar sometida al maltratador a estarlo al Estado.

Este apartado guarda una profunda similitud con el art. 23 del Estatuto de la Víctima *“Derecho a la evaluación individual de las víctimas a fin de determinar sus necesidades especiales de protección”* teniendo presente las características personales de la víctima, la naturaleza del delito y la gravedad de los perjuicios causados a la víctima, así como el riesgo de reiteración del delito y por último, las circunstancias del delito, si fueron violentos o no. Esta es una pieza fundamental para una correcta intervención con la víctima, y por ello, mi propuesta de actualizarlo e incluirlo como un artículo dentro de la LIVG y no como un apartado dentro de otro artículo.

Asimismo, en el artículo 19 en el que las mujeres *“Tendrán derecho a la asistencia social integral a través de estos servicios sociales los menores que se encuentren bajo la patria potestad o guarda y custodia de la persona agredida. A estos efectos, los servicios sociales deberán contar con personal específicamente formado para atender a los menores, con el fin de prevenir y evitar de forma eficaz las situaciones que puedan comportar daños psíquicos y físicos a los menores que viven en entornos familiares donde existe violencia de género”*.

La realidad a la que nos enfrentamos es que esto no se cumple, viendo que no existe personal específicamente formado para atenderlos. Muchas de las mujeres que vienen a consulta refieren la necesidad que tienen de que sus hijos reciban asistencia psicológica y además, preguntan si esta es posible, porque les parece que les hace falta por todo lo que han tenido que vivir y los comportamientos que tienen.

En el artículo 35 en relación a la sustitución de penas *“En el caso de que el reo hubiera sido condenado por un delito relacionado con la violencia de género, la pena de prisión sólo podrá ser sustituida por la de trabajos en beneficio de la comunidad. En estos supuestos, el Juez o Tribunal impondrá adicionalmente, además de la sujeción a programas específicos de reeducación y tratamiento psicológico, la observancia de las obligaciones o deberes previstos en las reglas 1.ª y 2.ª, del apartado 1 del artículo 83 de este Código.”*

Quizá sea dura la medida que propongo, pero me parece que no debe de sustituirse una pena en prisión por esa violencia de género que en ocasiones pone en serio peligro la integridad y vida de la mujer, que se plantee sustituirla por trabajos en beneficio a la comunidad, debido a que, la mujer refiere como una injusticia y siente que sólo el agresor tendrá condena si la mata. Es impactante cuando te dicen esto, pero puedes observar como el hecho de realizar beneficios al servicio de la comunidad les permite continuar con sus vidas con pocas restricciones.

También hace mención a la reeducación, la cual me parece una medida indispensable que cuando realizamos un análisis de realidad no se ejecuta, y aquí es donde la Ley debería de hacer una revisión porque es el foco principal de la problemática.

Si no se hace un buen trabajo psicológico con el agresor, con todo índice de probabilidad, cuando este salga de prisión volverá a reincidir al tener unas creencias y unas ideas muy arraigadas de sumisión de la mujer.

En el artículo 36 que recoge la “*protección contra las lesiones*” la pena debería tener un abanico más amplio, y no ser de dos a cinco años, porque a mi parecer se necesitaría revisar y quizá ampliar la posible condena según los hechos que engloban la agresión, puesto que, en muchas ocasiones las agresiones pueden ser tentativas de homicidio.

De igual manera, los artículos 37, 38 y 39 “*protección contra los malos tratos, protección contra las amenazas, protección contra las coacciones*” deberían de ser revisadas, ya que, como he dicho antes, estas penas necesitan una buena regulación e individualización no teniendo la misma posible franja de condena porque no es igual recibir unos malos tratos persistentes, que unas amenazas o coacciones. Y si la finalidad del legislador era equiparar su igual gravedad, quizá sería interesante englobarlas en un mismo artículo matizándolo con apartados.

En el artículo 40 “*quebrantamiento de condena*” nos enfrentamos de nuevo ante un artículo que ha creado bastante controversia y diversidad de opiniones. En cuanto a las vías de solución adoptadas por la jurisprudencia para resolver la posible responsabilidad penal en los casos en que las víctimas de violencia de género inducen o posibilitan que el obligado incumplan la pena de alejamiento para poder reanudar la convivencia han sido dispares, llegando a establecerse tres soluciones distintas, como son (Tamarit, 2015):

- a) Eximir de responsabilidad al obligado por la medida de protección al considerar atípica la conducta.
- b) Castigar exclusivamente al obligado pese a ser consentido por la mujer el quebrantamiento de la medida de protección
- c) Castigar tanto al obligado como a la persona beneficiaria.

En mi opinión, no se debería de castigar a ambas partes por igual, como consecuencia del estado psicológico y de dependencia de la mujer maltratada a su agresor, que aquí no se contempla. Quizá, si deba aplicarse algún tipo de falta a la mujer para hacerla consciente de la situación, pero no puede equipararse de igual forma que se la salte el agresor que tiene otras intenciones, a la mujer, que lo único que busca en muchas ocasiones es sacrificarse, intentando retomar el contacto con su agresor por el bien de sus hijos si esta los tiene.

Repito, es importante que no ignoremos que la toma de conciencia de que se está siendo maltratada, la decisión de reaccionar frente a ese hecho, así como la de cambiar de vida y de romper toda relación con el agresor, son procesos psicológicos complejos, y normalmente, no son lineales sino que cursan entre dudas, temores y pasos atrás (Ortubay, 2014)

La última modificación que debería hacerse y que propongo, es en relación al artículo 11 que queda recogido en el Estatuto de la Víctima, “*Derecho a la protección de la víctima durante la investigación penal*” concretamente en el apartado b haciendo mención a la declaración de la víctima, donde en este caso, para estas mujeres maltratadas, se debería realizar lo mismo que con los menores, que consiste en la grabación de la declaración de la mujer para así conseguir protegerla de una victimización secundaria, puesto que, el hecho de tener que repetir la historia una y otra vez, les provoca un daño psicológico importante y en muchas ocasiones cuando vienen a consulta refieren el cansancio de haberlo repetido tantas veces, que no tienen ganas de contarlo por no sufrir. Aquí es donde más flaquea nuestro sistema judicial, que necesitaría incluir este artículo dentro de la LIVG pero con esta modificación en relación a la toma de declaraciones.

Hemos conseguido un importante avance en toda esta temática y para nada, hay que quitarle el mérito y la gran labor de la LIVG, pero es precisamente dicho avance lo que invita a continuar por esta línea dando un paso firme en la intención de erradicar esta cultura machista.

4. Bibliografía

Martínez García, E. (2015). “La tutela de la mujer víctima de un delito de violencia de género en España y Europa: ¿El principio de una nueva era?”, en AAVV *El proceso penal en la encrucijada: homenaje al Dr. César Crisóstomo Barrientos Pellecer*. Servei de Comunicació i Publicacions de la Universitat Jaume I, 801-846.

Ortubai Fuentes, M. *Diez años de la Ley Integral contra la Violencia de Género: Luces y sombras*. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (2014)

Planchadell Gargallo, A. (2015). “La regulación de la situación de la víctima: ¿maremágnum legislativo?” en AAVV. *El proceso penal en la encrucijada: homenaje al Dr. César Crisóstomo Barrientos Pellecer* (pp. 1097-1141). Servei de Comunicació i Publicacions de la Universitat Jaume I.

Planchadell Gargallo, A (2018). “La protección procesal penal de la víctima del delito en España: particular referencia al Estatuto de la Víctima del Delito” en Vargas Lozano, R. y Vargas, Á. *Procedimiento especial abreviado y acusador privado*. Tirant lo Blanch. 195-230

RIGHTS, H. T. M. F. (2014). *Violence against women: an EU-wide survey*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Tamarit Sumalla, J. M. (2015). *Los derechos de las víctimas. El estatuto de las víctimas de delitos: comentarios a la Ley 4/2015* (pp. 15-68). Tirant lo Blanch.

Urbano Ángel, E. (2016). *Los femicidios íntimos en España: ley y jurisprudencia*. Universitat de les Illes Balears.